

# 22-D: programa económico mínimo

Ante las elecciones de hoy los programas de los diferentes partidos políticos no parecen importar demasiado en este contexto de excepcionalidad, de gran polarización, y de apelación a las emociones más que a las razones de los votantes. Las previsiones electorales auguran una difícil formación de gobierno ante las fuerzas igualadas de los dos bloques y con poco grosor en medio. ¿Cuál será la repercusión en la economía? Los avisos de moderación de la actividad económica ya se han materializado: el producto (interior bruto) catalán crecerá la mitad el cuarto trimestre de este año en relación con el tercero, y la previsión para el 2018 es que baje el crecimiento de manera notable por debajo de la media española.

Queremos plantear aquí qué sería bueno que pasara a partir del 22-D para la economía de Catalunya y que, además, y esta es la parte difícil, sea factible dadas las previsibles correlaciones de fuerzas de los partidos políticos. Se trataría de encontrar un común denominador para permitir salir de la delicada situación actual. Sería deseable proporcionar estabilidad política y seguridad jurídica a los actores económicos, tanto consumidores como empresas. La incertidumbre paraliza. Las fuerzas políticas deberían ser capaces de hacer un pacto, aunque implícito, que, sin renunciar a sus objetivos máximos respectivos, preserve la economía. Dicho de otra manera, aislar algunos parámetros básicos de la economía del campo de batalla político.

La pregunta es si puede haber una serie de cuestiones de país, un programa mínimo, en el que una gran mayoría del nuevo Parlament (muy por encima del 50%) pudiera estar de acuerdo y que, además, fuera apoyado por la sociedad civil. Recordemos, por ejemplo, que en Euskadi el concierto económico disfruta de un consenso muy amplio de fuerzas políticas enfrentadas. A título ilustrativo, y no exhaustivo, parece que puede haber varias áreas de acuerdo de mínimos dadas las ofertas electorales. Eso sí, este posible consenso tendría que ser realista, es decir, los números tienen que cuadrar. De hecho, tendría

que ser obligatorio que los partidos políticos añadieran una memoria económica de cómo piensan financiar de forma precisa sus –siempre generosas– promesas electorales.

La base del acuerdo para mejorar la financiación de Catalunya podría ser el respeto de la ordinalidad (que una región no quede peor en el ranking para financiar los servicios por habitante después de las transferencias entre regiones de lo que estaba antes de la redistri-

**Para avanzar en bienestar hay que llevar a cabo iniciativas y reformas que tengan amplio consenso social y político**



bución), que se tuviera en cuenta el diferente coste de la vida en las distintas regiones, y que la inversión en infraestructuras estuviera de acuerdo con el peso económico de Catalunya. El consenso en infraestructuras como el corredor del Mediterráneo, cercanías, accesos al puerto y aeropuerto, así como su gestión autónoma, parece que es grande. El acto del *Iese* del 2007 lo mostró pero no se materializó en actuaciones concretas. En fiscalidad, el consenso es más difícil dado que algunas propuestas políticas quieren subir los impuestos y otras bajarlos, pero sí que lo hay en la lucha contra las bolsas de fraude fiscal y contra la corrupción. Junto con la mejora de la eficiencia de la Administración, estos factores pueden generar recursos adicionales.

En relación con el Estado de bienestar, las divergencias son importantes, pero la rever-

sión de los recortes debidos a la crisis en sanidad y educación no se discuten. También en el objetivo de rebajar drásticamente los niveles de pobreza y desigualdad ocasionados por la crisis. En educación es evidente que hay que hacer un plan contra la elevada tasa de abandono escolar y para dar un impulso decisivo a la formación profesional y al conocimiento del inglés. El índice de paro juvenil sigue siendo muy elevado y la calidad de los puestos de trabajo es baja. Las políticas activas de empleo siguen siendo poco efectivas. La reducción del paro y la mejora de los salarios también tienen que venir de la mano del pacto por la industria, de gran consenso. Este sector crea puestos de trabajo de más calidad que muchos servicios y hay que apoyarlo con medidas como la potenciación de la formación profesional, el levantamiento de barre-

ras al crecimiento de las empresas, y un esfuerzo mucho mayor en investigación y desarrollo (I+D). De hecho, Catalunya y España han reaccionado a la crisis alejándose de Europa en términos de esfuerzo en I+D, lo han disminuido cuando los países europeos lo han aumentado. Aquí haría falta un pacto también para preservar la excelencia de la red de centros de investigación que han puesto Catalunya en el mapa europeo y mundial. Estos centros de investigación tienen que ser un puntal para el desarrollo de nuevas tecnologías y la economía digital. Otro sector

donde parece que haya avenencia para mejorar su sostenibilidad y calidad es el turístico. Se tiene que transformar en una industria que no suponga externalidades negativas para el resto de la economía.

La lista de medidas mencionadas del programa mínimo no son de ninguna manera exhaustivas, sino ejemplos sugerentes de que podría haber acuerdos amplios si hubiera voluntad política. De otra manera, las medidas propuestas no dejarán de ser una carta a los Reyes Magos. Esta es la receta nórdica ante las dificultades: llevar a cabo iniciativas y hacer reformas que disfruten de un amplio consenso social y político. Sólo así será posible no retroceder y avanzar en bienestar social. ●

**Edificio del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona**